



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Demandante: JAIRO GIRALDO RESTREPO
Demandado: ACP COLPENSIONES
Radicado: 05001 31 05 004 2019 00562 01
Sentencia: S-222

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de COLPENSIONES, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín el día 30 de septiembre de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

JAIRO GIRALDO RESTREPO demandó a la ACP COLPENSIONES para que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez como beneficiario del régimen de transición a partir del 9 de marzo de 2015, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas del proceso.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 15 de junio de 1951 por lo que cumplió los 60 años de edad el mismo día y mes del año 2011; que laboró para diferentes empleadores desde el 23 de marzo de 1973; que por considerar cumplidos los requisitos para la pensión de vejez hizo una primera solicitud que fue negada según Resolución GNR 13462 del 16 de enero de 2014; que presentó recursos de reposición y en subsidio apelación pero la entidad, mediante resoluciones GNR 271413 del 30 de julio de 2014 y VPB 18666 del 2 de marzo de 2015, decidió confirmar la negativa; que presentó solicitud de corrección de historia laboral el 12 de mayo de 2015; que su empleador AMIGOS CIENTÍFICOS S.A.S. también presentó una solicitud de corrección de historia laboral el 28 de enero de 2016; que fue inducido erróneamente a seguir cotizando, por lo que las cotizaciones que había suspendido en el mes de enero de 2015, las reanudó a partir de enero de 2017; que el 21 de diciembre de 2018 presentó una nueva solicitud pensional, también negada según Resolución SUB 81446 del 2 de abril de 2019; que su historia laboral refleja una serie de inconsistencias y en total acredita 1113 semanas de cotización hasta la última realizada en el mes de octubre de 2018; y que radicó una nueva solicitud el 25 de julio de 2019 que no ha sido resuelta por la entidad.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento del demandante y todo lo relacionado con las solicitudes de pensión de vejez, advirtiendo que procedió al reconocimiento de la prestación mediante Resolución SUB 232225 del 26 de agosto de 2019 en virtud del Decreto 758 de 1990 a partir del 1 de noviembre de 2018. Frente a lo demás dice simplemente que no son hechos sino apreciaciones que hace la apoderada del demandante que deben ser probados en el proceso. Se opuso a las pretensiones al haber reconocido la

prestación conforme a derecho y como excepciones propuso inexistencia de obligación por parte de COLPENSIONES, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios y ausencia de causa para pedir.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Ante el reconocimiento en el curso del proceso de la pensión de vejez reclamada, la fijación del litigio fue limitada al reconocimiento del retroactivo pensional causado desde el 9 de marzo de 2015, junto con los intereses y la indexación de las condenas, así como respecto de los intereses moratorios sobre la suma reconocida por la entidad mediante Resolución SUB 232225 del 25 de agosto de 2019.

En la misma audiencia, llevada a cabo el 30 de septiembre de 2021 se profirió sentencia mediante la cual el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer y pagar al demandante la suma de \$20'712.125 por concepto de retroactivo pensional causado entre el 6 de septiembre de 2016 y el 30 de octubre de 2018 aplicando prescripción parcial, así como los intereses moratorios sobre la suma reconocida en la sentencia y sobre el valor retroactivo pagado por la entidad en Resolución SUB 232225 del 26 de agosto de 2019, además de las costas del proceso, fijando como agencias en derecho la suma de \$1'500.000.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de COLPENSIONES presentó recurso de apelación cuestionando que el Juez en su sentencia se apartara de lo consagrado en los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990. Cita la sentencia del 24 de marzo del 2000 rad 13425 advirtiendo que el demandante continuó con sus cotizaciones hasta octubre de 2018, y que, aunque hubo una solicitud inicial presentada el 7 de noviembre de 2013, la misma fue negada por no

reunir la cantidad mínima de semanas cotizadas, de modo que la parte demandante debió acudir a la vía ordinaria en busca del reconocimiento pensional por considerar reunidos los requisitos, pero a partir de esa fecha realizaron nuevas solicitudes con el ánimo de no congestionar la administración de justicia y continuó realizando aportes con una nueva afiliación.

Solicita se revoque la condena de reconocimientos de intereses moratorios contemplados en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, ya que una vez corregida la historia laboral del demandante la entidad expidió el acto administrativo SUB 23225 del 26 de agosto del 2019, mismo que se procedió a ingresar a nomina sin que trascurrieran los 4 meses con que cuenta la entidad para resolver este tipo de solicitudes, por lo que no se constituye mora y no hay lugar a dicha condena.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, la apoderada de COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión a través de los cuales solicita se revoque la sentencia de primera instancia en tanto la decisión adoptada va en contravía del ordenamiento jurídico y lo establecido en los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990. Señala que no hay ninguna inducción a error y que la negativa de la entidad estuvo ajustada a derecho, ya que para ese momento no contaba con la densidad de semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez y para ello fue necesario adelantar trámites de corrección de historia laboral.

También la apoderada del demandante hizo uso de su oportunidad legal advirtiéndole que desde el mes de enero de 2015 se encuentran acreditados los requisitos de edad y semanas de cotización para el reconocimiento de la pensión de vejez, por ende, esas cotizaciones realizadas entre enero de 2017 y octubre de 2018, obedecieron a una

equivocada decisión de la entidad al negar la pensión cuando todos los requisitos estaban ya cumplidos.

CONSIDERACIONES:

En los términos de la fijación del litigio que se hizo al comienzo de la audiencia de trámite y juzgamiento llevada a cabo en primera instancia, es posible advertir que la pretensión central, concreta y específica del Sr. JAIRO GIRALDO RESTREPO, consiste en que se le reconozca el retroactivo de su pensión de vejez a partir del 9 de marzo de 2015, cuando acredita el cumplimiento en su totalidad de los requisitos legales para el reconocimiento de la prestación, a pesar de lo cual la ACP COLPENSIONES decidió negarla, viéndose obligado a continuar cotizando ante la decisión desfavorable que en su momento se adoptó sin tener en cuenta su historial de cotizaciones. Pide además el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 sobre el retroactivo pensional que se cause y sobre el ya reconocido por la entidad, así como las costas del proceso.

En ese orden se desatarán los asuntos apelados.

1. Retroactivo pensional.

Se acredita según el documento visible en la página 29 del expediente escaneado, que el demandante solicitó por primera vez la pensión de vejez el 7 de noviembre de 2013, por lo que COLPENSIONES, mediante Resolución GNR 13462 del 16 de enero de 2014, responde su solicitud en punto a negar el derecho pretendido, atendiendo a que no se cumplían con los requisitos que para su reconocimiento establece la Ley 797 de 2003, ya que en toda su vida laboral contabilizaba un total de 908 semanas de cotización. Decisión que fue confirmada posteriormente según resoluciones GNR 271413 del 30 de julio de 2014 y VPB 18666 del 2 de marzo de 2015 a través de las

cuales se resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos.

Una segunda solicitud de pensión de vejez fue radicada el 21 de diciembre de 2018, con resultado desfavorable a los intereses del demandante según Resolución SUB 81446 del 2 de abril de 2019 por el hecho de acreditar 1055 semanas de cotización y no resultarle aplicable el Decreto 758 de 1990 por efectos del Acto Legislativo 01 de 2005.

Posteriormente y ante una tercera solicitud de pensión de vejez, concretamente el 25 de julio de 2019, la propia entidad procedió esta vez sí con el reconocimiento pensional a través de la Resolución SUB 232225 del 26 de agosto de 2019. En ella, conocida en el curso del proceso, COLPENSIONES dispuso como fecha del status pensional el 4 de noviembre de 2014 y del disfrute o pago de la pensión de vejez el 1 de noviembre de 2018 en aplicación del régimen de transición por encontrar cumplidos los requisitos del Decreto 758 de 1990, al acreditar, para ese momento, un total de 1102 semanas cotizadas, siendo la última de ellas la correspondiente al periodo de octubre de 2018 (páginas 143 a 156).

Ahora bien; según el criterio sostenido en reiteradas ocasiones por éste Tribunal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año, existen 2 momentos diferentes en torno al derecho pensional que le asiste al afiliado: el primero de ellos es la causación del derecho, que se da cuando la persona cumple con los requisitos establecidos en la ley para adquirir la pensión; y el segundo, el disfrute mismo de la pensión que se configura cuando la persona se desafilia del sistema o régimen de pensiones. Se ha dicho, además, que a pesar de que el afiliado tenga cumplidos los requisitos de edad y semanas de cotización exigidos para acceder al derecho pensional, puede continuar cotizando si su intención es obtener un mayor IBL y con ello

una mesada pensional superior, casos en los cuales necesariamente deberá tenerse en cuenta hasta la última semana de cotización realizada al sistema.

Sin embargo, también se tiene aceptado que cuando esas cotizaciones posteriores no tienen ninguna incidencia en la mesada pensional, es decir, cuando no implican una mejora en su valor, el reconocimiento pensional es factible hacerlo desde el momento mismo del cumplimiento de los requisitos mínimos. Lo anterior tiene mayor importancia cuando esas cotizaciones posteriores a las mínimas requeridas son consecuencia de una equivocada decisión de la entidad a la hora de resolver la solicitud pensional del afiliado, que, inducido en error, lo lleva a continuar realizando aportes para, supuestamente, cumplir las condiciones mínimas, cuando en realidad ya estaban satisfechas y habían quedado acreditadas.

En ese sentido, la jurisprudencia ha identificado ciertos casos en los que la aplicación absoluta de la norma no resulta adecuada, por ejemplo, en el denominado como i) retiro tácito y ii) la inducción en error. Se centra el estudio del caso bajo examen en esta última excepción, por cuanto la parte actora aduce que la decisión de COLPENSIONES de negarle la pretensión la indujo en error, por lo que su derecho pensional apenas vino a ser reconocido en el año 2019 cuando lo procedente era desde mucho antes.

El error es una equivocada o inexacta creencia o representación de la realidad jurídica o material, que sirve de presupuesto para la realización de un acto jurídico. En materia pensional la jurisprudencia le ha atribuido consecuencias en el evento en que el afiliado al sistema de pensiones, no obstante haber causado la prestación por reunir los requisitos de edad y tiempo de servicios, y solicitado su reconocimiento en forma oportuna, se ha visto forzado a seguir cotizando debido a una conducta negligente al momento del análisis

de la procedencia del derecho, o al negarlo argumentando el déficit de aportes o cotizaciones.

Es decir, se manifiesta una inducción en error derivada de la posibilidad que existe para el afiliado de seguir cotizando luego de tener cumplidos los requisitos mínimos, pero esas cotizaciones posteriores son consecuencia de una equivocada decisión de la entidad a la hora de resolver la solicitud pensional del afiliado, que, inducido en error, lo lleva a continuar realizando aportes para, supuestamente, cumplir las condiciones mínimas, cuando en realidad ya estaban satisfechas y habían quedado acreditadas.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la 34514 del 1 de septiembre de 2009, 39391 del 22 de febrero de 2011, la 42289 del 5 de junio de 2012, la SL 5603 de 2016, la SL 11895 de 2017 o la SL 415 del 21 de febrero de 2018, rad. 64761, ha desarrollado este criterio, frente a la inducción a error por parte de la entidad. En ellas ha indicado lo siguiente: *“Así, por ejemplo, en tratándose de eventos en los que el afiliado ha sido conminado a seguir cotizando en virtud de la conducta renuente de la entidad de seguridad social a reconocer la pensión, que ha sido solicitada en tiempo, la Corte ha estimado que la prestación debe reconocerse desde la fecha en que se han completado los requisitos”*.

De la anterior jurisprudencia se extraen entonces los siguientes presupuestos para la configuración de la inducción a error; **i)** la existencia de la manifestación del afiliado tendiente al disfrute de la pensión de vejez, **ii)** la respuesta negligente o errada de la administradora encargada de reconocer la pensión, y **iii)** que ese error de la entidad lleve al afiliado a seguir efectuando cotizaciones, si se quiere superfluas, al sistema.

Elementos que, contrario a lo que sostuvo el funcionario *a quo* en su sentencia, en este caso no se configuran en su totalidad,

especialmente por cuanto la decisión que en ese momento se adoptó, no necesariamente puede ser considerada como equivocada o negligente como pasará a verse.

Resulta que para aquella época en que se expidieron las resoluciones GNR 13462 del 16 de enero de 2014, GNR 271413 del 30 de julio de 2014 y VPB 18666 del 2 de marzo de 2015 a través de las cuales COLPENSIONES le niega por primera vez el derecho pensional al demandante, la entidad tuvo en cuenta la totalidad de semanas que encontró aplicadas en su historia laboral para ese momento, esto es, 908 en el primer caso, 922 en el segundo y 921 en el tercero, de las cuales, si bien más de 760 eran previas a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, solo 359.8 correspondían a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida y al ser igualmente menos de 1000 no podía ordenarse el reconocimiento de la prestación según el 758 de 1990.

Debe tenerse en cuenta que aunque con posterioridad se logre acreditar la exigencia de 1000 semanas, de lo que da cuenta justamente la historia laboral que se aporta con la demanda actualizada al 9 de mayo de 2019, lo que incluso es aceptado por la entidad, también lo es que a esa cifra se llegó luego de que se incluyera un importante número de cotizaciones con el empleador AMIGOS CIENTÍFICOS S.A.S, concretamente entre el mes de noviembre de 2013 y el 1 de enero de 2015, lo que ocurrió luego de los trámites de solicitud de corrección de historia laboral presentados por el señor GIRALDO RESTREPO, particularmente cuando se acreditó la relación laboral y se realizó el pago del equivalente a esas semanas.

Según esa misma historia laboral, el pago de los referidos ciclos no había sido realizado oportunamente por el empleador, lo que apenas vino a ocurrir, en todos los casos, se repite de noviembre de 2013 al 1 de enero de 2015, con el pago efectuado el 13 de marzo de 2015.

Quiere decir lo anterior, que, al momento inicial de resolver la petición, COLPENSIONES obró conforme a la ley pues la información de que disponía no le permitía otra cosa sino negar la pensión de vejez, la que se pudo obtener una vez iniciado y culminado el trámite de corrección de historia laboral, de acreditación de la relación laboral y de pago de las semanas cotizadas ante el incumplimiento en tal aspecto de parte del empleador. En esas condiciones, no es posible como se solicita reconocer retroactivo alguno por inducción a error, pues en este caso no hubo propiamente una decisión de COLPENSIONES que fuera injustificada para entender que ha obligado al afiliado, sin razón, a seguir cotizando.

La única Resolución que contiene una decisión injustificada es la SUB 81446 del 2 de abril de 2019 que resuelve la solicitud del 21 de diciembre de 2018. Para ese momento sí existe claridad en cuanto a que el demandante ya tenía cotizadas las semanas mínimas requeridas para el reconocimiento de la pensión de vejez, a pesar de lo cual le fue negada la prestación. Sin embargo, como COLPENSIONES reconoció la pensión a partir del 1 de noviembre de 2018, es decir, antes de esa segunda solicitud que habría podido dar lugar a una inducción a error, tampoco con ello se genera retroactivo pensional alguno.

En esas condiciones, al no haber un retroactivo pensional pendiente de pago, tampoco hay lugar a reconocer intereses de mora, por lo que no existe para la Sala la necesidad de abordar este tema puntual.

Solo se analizará la procedencia de tales intereses con respecto al valor reconocido por COLPENSIONES en la Resolución SUB 232225 del 26 de agosto de 2019 como retroactivo pensional causado desde el 1 de noviembre de 2018 y que fuera calculado en la suma de \$7'985.854, ingresado en nómina de septiembre de 2019 para ser pagado al mes siguiente.

En tal sentido, para la Sala es evidente que la entidad incurrió en mora en el pago de las mesadas pensionales causadas desde el 1 de noviembre de 2018, de manera que hay lugar a concederlos atendiendo a que, en materia pensional, la norma que los consagra propende por el pronto pago de las mesadas pensionales para así proteger los derechos de los pensionados frente a las dilaciones injustificadas en el trámite administrativo. Intereses que son procedentes en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales cuando se ha causado el derecho, y no solo cuando son reconocidos con posterioridad a la causación.

Ahora bien; como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades éste Tribunal a través de sus diversas Salas de Decisión, el reconocimiento de los intereses moratorios, para el caso de las pensiones de vejez, debe hacerse antes de vencidos los 4 meses después de efectuada la reclamación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 100 de 1993 y en la sentencia SU 975 del 2003 de la Corte Constitucional, la cual indica que para la entidad demandada nace la obligación al reconocimiento de éste concepto pasados 4 meses después de elevada la solicitud del derecho prestacional, toda vez que las administradoras gozan de ese periodo para resolver sobre la procedencia o no del derecho.

De otro lado, no se desconoce el criterio jurisprudencial desarrollado por la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Laboral en sentencias como la 13388 del 1º de octubre de 2014 y reiterada en otras más recientes como la SL 2941 de 2016, la SL 3707 del 1 de agosto de 2018, rad. 50665, o la SL 4794 del 6 de noviembre de 2019 en las que se ha considerado que, si la entidad tenía razones válidas para negar la prestación, no hay lugar a la imposición de los intereses de mora. Resulta que en este caso la prestación no se está reconociendo con base en un cambio jurisprudencial, luego de resolver una disputa entre beneficiarias o por alguna otra circunstancia similar como las que la Corte Suprema

de Justicia ha considerado como eximentes para la orden de intereses de mora (Sentencias SL 4794 de 2019 o SL 5673 de 2021).

De ésta manera, teniendo claro que el demandante presentó la solicitud con el cumplimiento de todos los requisitos legales desde el 21 de diciembre de 2018, significa que la entidad sí incurrió en mora al tardarse más de los 4 meses que consagra la ley para resolver este tipo de solicitudes, y que se cuentan a partir de la radicación de la solicitud por el peticionario y hasta la fecha de pago, que en este caso corresponde al 30 de septiembre de 2019.

A pesar de lo anterior, la decisión de primera instancia deberá ser modificada en atención a que el Juez de Primera Instancia liquidó los intereses de mora desde el 1 de noviembre de 2018, cuando lo correcto era hacerlo 4 meses después de presentada la solicitud, es decir, a partir del 21 de abril de 2019, lo que arroja como resultado una suma de \$723.206 en lugar de lo reconocido en el fallo del *a quo* que había sido de \$1 ' 108.094.

Se advierte, además, que es necesario tener en cuenta que para llegar a ese resultado fue necesario descontar de cada mesada el valor del porcentaje correspondiente a la cotización al Sistema General de Salud equivalente al 12%, lo cual opera por el solo ministerio de la ley conforme al art. 143 de la Ley 100de 1993, y con sujeción a reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en tanto se trata de un porcentaje que realmente no corresponde al pensionado sino que va destinado al sistema.

Fecha del cálculo	1-oct-19
Período	201909
Interés Bancario Corriente	19,32%
Tasa E.A. Moratoria	28,98
Tasa Nominal Anual	25,72%
Tasa Nominal Diaria	0,0704671%

Período		Fecha de mora	Diferencia en días	Valor cuota	Tasa diaria	Valor presente
Desde	Hasta					
1-nov-18	30-nov-18	21-abr-19	163	\$ 687.496	0,07047%	\$ 78.967
1-dic-18	31-dic-18	21-abr-19	163	\$ 1.374.986	0,07047%	\$ 157.933
1-ene-19	31-ene-19	21-abr-19	163	\$ 728.742	0,07047%	\$ 83.704
1-feb-19	28-feb-19	21-abr-19	163	\$ 728.742	0,07047%	\$ 83.704
1-mar-19	31-mar-19	21-abr-19	163	\$ 728.742	0,07047%	\$ 83.704
1-abr-19	30-abr-19	1-may-19	153	\$ 728.742	0,07047%	\$ 78.569
1-may-19	31-may-19	1-jun-19	122	\$ 728.742	0,07047%	\$ 62.650
1-jun-19	30-jun-19	1-jul-19	92	\$ 728.742	0,07047%	\$ 47.244
1-jul-19	31-jul-19	1-ago-19	61	\$ 728.742	0,07047%	\$ 31.325
1-ago-19	31-ago-19	1-sep-19	30	\$ 728.742	0,07047%	\$ 15.406
1-sep-19	30-sep-19	1-oct-19	0	\$ 728.742	0,07047%	\$ 0
					TOTAL	\$ 723.206

Sin costas en esta instancia

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, el día 30 de septiembre de 2021, pero la **REVOCA** en cuanto condenó a la entidad demandada al reconocimiento y pago del retroactivo de la pensión de vejez junto con los respectivos intereses moratorios, para en su lugar ABSOLVERLA por este concepto; y la **MODIFICA** en cuanto a que los intereses de mora sobre el retroactivo concedido en Resolución SUB 232225 del 26 de agosto de 2019, deben ser liquidados desde el 21 de abril de 2019, lo que arroja una suma de \$723.206 en lugar de \$1´108.094 que había dicho el Juez de Primera Instancia.

Sin costas en esta instancia

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **767cf0b98da8d9866832e0cd96296312b826eaa4131b1daf2c8757ebe94468f3**

Documento generado en 25/08/2022 10:16:33 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>